

**JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SECCION SEGUNA**

Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil dieciocho (2018)

PROCESO: 110013331-021-2018-00130-00
DEMANDANTE: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
COLPENSIONES
DEMANDADO: ALICIA ARDILA ROMERO

Entra al Despacho el MEDIO DE CONTROL DE LESIVIDAD, instaurado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, en contra de la señora ALICIA ARDILA ROMERO, para resolver la medida cautelar presentada por la parte actora.

**I.- MEDIDA CAUTELAR DE LA SUSPENSION PROVISIONAL DEL
ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO.**

El apoderado Judicial de la parte actora – ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, presenta MEDIDA CAUTELAR (fls. 1 al 15) de suspensión provisional de los efectos de la Resolución GNR365572 del 2 de diciembre de 2016, mediante la cual, se reconoció y ordenó el pago de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a favor de la señora ALICIA ARDILA ROMERO, en cuantía de \$13.998.554, ya que al verificar el Sistema de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se encontró que actualmente se encuentra percibiendo pensión de vejez concedida por la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EN LIQUIDACION – CAJANAL hoy UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL – UGPP, y otra pensión reconocida por parte del FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL – FOPEP.

La anterior solicitud tiene como fundamento el artículo 229 al 241 del C.P.A.C.A., determinando que la demandada no tiene derecho a la indemnización sustitutiva, por lo que la resolución que la concede es contraria al ordenamiento jurídico.

II. DEL TRÁMITE DE LA MEDIDA CAUTELAR:

Mediante auto de fecha 13 de abril de 2018 (fls. 17 al 18), se ordenó correr traslado a la señora ALICIA ARDILA ROMERO, por el término de cinco (5) días, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 233 del C.P.A.C.A., y S.S., notificación que fue remitida por el Despacho a través de la oficina de apoyo judicial con los anexos para la contestación correspondiente, frente a lo cual, aparece una constancia de recibido (fol. 31), de una persona que se identificó con un número de cedula que no corresponde a la señora ALICIA ARDILA ROMERO, quien funge como parte demandada en este proceso.

No obstante lo anterior, el Doctor JUAN FERNANDO GRANADOS TORO, identificado con la C.C. 79.870.592 de Bogotá y, T.P. 114.233 del C.S.J., aporta memorial poder otorgado por la señora ALICIA ARDILA ROMERO, el 26 de junio de 2018 (fls. 23 al 40 del cuaderno principal), para actuar en el presente proceso, actuación que será entendida como una notificación por conducta concluyente en virtud de lo establecido en el artículo 301 del C.G.P., para efectos de resolver la suspensión provisional de del acto administrativo demandado, solicitada por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

A la fecha, la señora ALICIA ARDILA ROMERO, ni su apoderado judicial constituido para asumir la defensa en este proceso, no han descrito el traslado otorgado en auto de fecha 13 de abril de 2018 (fls. 17 al 18).

III. PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

El artículo 230 del C.P.A.C.A., las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión y tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.

Dentro de las medidas cautelares que podrán ser adoptadas por el Juez, se encuentra la establecida en el numeral 3 del artículo 230 del C.P.A.C.A, la cual, se refiere a la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo. Sin embargo, para la adopción de dicha medida, se requiere el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 231 de la norma *ibídem*, el cual a la letra dice:

“Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por **violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.** Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. (subrayado fuera de texto)

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurren los siguientes requisitos: (...)

Planteado lo anterior, se tiene, que el C.P.A.C.A. en el numeral 3 del artículo 230 contempló como medida cautelar la suspensión de los actos administrativos, la que se encuentra condicionada a que el acto acusado contraría de manera clara, ostensible, flagrante o manifiesta lo dispuesto en normas superiores; violación que se debe constatar con el simple cotejo de las normas que se confrontan o mediante documentos públicos aducidos en su solicitud, pues al requerirse un estudio de fondo, el juez debe agotar el procedimiento y diferir el pronunciamiento sobre la validez del acto acusado para el momento en que se dicte sentencia.¹

Bajo los presupuestos enunciados con anterioridad, se absolverá la medida cautelar deprecada por la parte actora.

¹ C.E. , Auto 21845 fe.7/2002 M.P. Alir Eduardo Hernandez Enriquez

La solicitud presentada tiene sustento que la indemnización sustitutiva reconocida a favor de la señora ALICIA ARDILA ROMERO, en cuantía de \$13.998.554, a través de la Resolución Nª GNR365572 del 2 de diciembre de 2016, no se encuentra ajustada a derecho debido a que la mencionada señora, se encuentra percibiendo en la actualidad un pensión de vejez concedida por la CAJA por la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EN LIQUIDACION – CAJANAL hoy UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL – UGPP, y otra pensión reconocida por parte del FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL – FOPEP.

Al evidenciarse tal apreciación, este Despacho Judicial, en el auto de fecha 13 de abril de 2018 (fls. 17 al 18), procedió a requerir pruebas al FOPEP y a la UGPP, quienes dan contestación al requerimiento de la siguiente manera:

- El FOPEP a través del oficio RAD2018019615 del 16 de mayo de 2018, indica que no tiene como función reconocer pensiones y, que además al verificar la base de datos de la entidad, encontró que la señora ALICIA ARDILA ROMERO, desde el mes de diciembre de 2008 se encuentra incluida en nómina del FOPEP como pensionada de la liquidada CAJANAL (hoy UGPP – pensión gracia); fecha desde la cual el FOPEP ha girado de forma oportuna a favor de la señora ALICIA ARDILA, los valores que han sido reportados a su favor por la UGPP y, se remite histórico de pagos (fls. 25 al 29).
- La UGPP, a través del oficio rad 201811102981581 de fecha 8 de junio de 2018 (fol. 32 al 39), remite la resolución Nª 55153 del 6 de noviembre de 2008, por medio de la cual, se reconoció pensión gracia a la señora ALICIA ARDILA ROMERO, al respecto remite la citada resolución (fls. 32 al 39)

Es así que de la simple lectura de los textos jurídicos citados como base de la solicitud y el contenido del acto administrativo acusado, no se puede llegar a concluir que el mismo no se ajusta a la legalidad, pues exige entrar a valorar el material probatorio arrojado al expediente, entre otras cosas, porque tanto el FOPEP, como la UGPP, certifican que solo se le ha reconocido una pensión gracia a la señora ALICIA ARDILA ROMERO, a través de la Resolución N° 55153 del 6 de noviembre de 2008, la que fue aportada y aparece a folios 39 al 39, siendo necesario entrar a valorar todas las pruebas a efectos de determinar que otras pensiones pueden haberse reconocido a la parte actora y, si estas se excluyen entre sí y, hacen improcedente el pago de la indemnización sustitutiva que se discute en este proceso, pues la parte actora indica que a la señora ALICIA ARDILA se le ha reconocido una pensión de vejez y una de invalidez, sin aportar prueba que refiera tal dicho, además tal y como fue especificado por el FOPEP, el reconocimiento de pensiones no se encuentra a cargo de dicha entidad, sino de la UGPP.

En consecuencia, los presupuestos antes enunciados requieren de una valoración de las pruebas aportadas con el curso del proceso, lo cual, es una actividad propia de la sentencia, además es allí cuando debe definirse, como producto del debate que necesariamente debe surgir entre las partes, la capacidad de las documentos aportados en la demanda para desvirtuar la legalidad de los actos acusados, es decir, como la ilegalidad no surge a simple vista, como es la naturaleza de la medida cautelar, no es dable predicar una violación flagrante, de bulto, o prima facie, razón por la cual, se resolverá en forma adversa la medida cautelar solicitada.

En mérito de lo expuesto, este Despacho

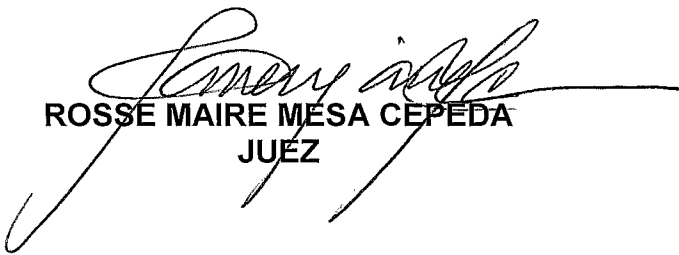
RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la medida cautelar de suspensión provisional de suspensión provisional de los efectos de la Resolución de GNR365572 del 2 de diciembre de 2016, mediante la cual, se reconoció y ordenó el pago de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a favor de la señora

ALICIA ARDILA ROMERO, en cuantía de \$13.998.554, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese por estado esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROSSE MAIRE MESA CEPEDA
JUEZ

catc

JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCION SEGUNDA

EL AUTO ANTERIOR .SE NOTIFICA A LAS PARTES
EN ESTADO ELECTRONICO No 31, A TRAVES DE LA PAGINA
WEB WWW.RAMAJUDICIAL.GOV.CO, HOY 06 DE agosto
DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), A LAS 8:00 A.M.


SECRETARIO

JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO – ORALIDAD

CIRCUITO DE BOGOTA

SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil dieciocho (2018)

REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Actor: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES - COLPENSIONES

Demandado: ALICIA ARDILA ROMERO

RADICADO:

2018-00130

*Por reunir los requisitos contemplados en la Ley 1437 de 2011, el despacho de conocimiento en PRIMERA INSTANCIA, **ADMITE** la presente demanda instaurada en ejercicio del medio de control de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO** presentada por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, mediante apoderado judicial, contra la señora ALICIA ARDILA ROMERO.*

Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del C.P.A.C.A para su trámite DISPONE:

1. Notifíquese personalmente la demanda a la señora ALICIA ARDILA ROMERO, a través de su apoderado facultado para ello; conforme a lo previsto en los artículos 197 y 198 C.P.A.C.A, y el artículo 612 del C.G. del P., que modificó el artículo 199 del C.P.A.C.A.

2. Notifíquese personalmente de la demanda a la Agente del Ministerio Público delegado para este Despacho, en la forma prevista en el artículo 197 y 198 C.P.A.C.A, y el artículo 612 del C.G. del P., que modificó el artículo 199 del C.P.A.C.A.

3. Notifíquese personalmente de la demanda a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en la forma prevista en el artículo 612 del C.G. del P, que modificó el artículo 199 del C.P.A.C.A.

4. Una vez notificadas las partes, quedan a disposición de las mismas, las copias de la demanda y sus anexos, en los términos dispuestos en el artículo 612 del C.G. del P, que modificó el artículo 199 del C.P.A.C.A. y, serán remitidas por correo certificado conforme al parágrafo 5 del artículo 612 del C.G. del P, que modificó el artículo 199 del C.P.A.C.A.

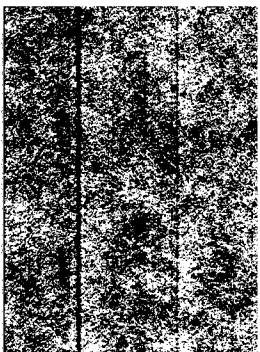
5. La parte demandante – ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, deberá depositar en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de este auto, la suma de cincuenta mil pesos (\$50.000.00) moneda legal, en la cuenta de ahorros N° **4-0070-0-27675-7** denominada Gastos del Proceso del Banco Agrario a nombre del Juzgado Veintiuno Administrativo, para cubrir gastos de notificación y comunicaciones (Decreto 2867/89).

6. Vencido el término de que trata el parágrafo 5 del artículo 612 del C.G. del P., córrase traslado de la demanda por el término común de **treinta (30) días**, a la señora ALICIA ARDILA ROMERO, a través del (a) señor apoderado facultado para ello; a los Terceros Interesados y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 172 del C.P.A.C.A.

7. La demandada deberá aportar con la contestación de la demanda todas las pruebas que tenga en su poder y pretenda hacer valer dentro del proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del C.P.A.C.A. Numeral 4.

8. La Entidad demandada deberá aportar **el expediente administrativo** que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentren en su poder.

9. RECONÓZCASE a la Doctora SUSAN JOANA PEREZ VERANO, identificada con la C.C. 1.020.788.598 de Bogotá y T.P. 284.097 del C.S.J., ,



como apoderado principal de la parte actora – ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, en los términos y, para los efectos del memorial poder visible a folio 1 vto del expediente.

10. RECONÓZCASE al Doctor JUAN FERNANDO GRANADOS TORO, identificado con la C.C. 79.870.592 de Bogotá y T.P: 114.233 del C.S.J, como apoderado principal de la señora ALICIA ARDILA ROMERO, en los términos y, para los efectos del memorial poder visible a folio 24 del expediente, a quien se le puede notificar al correo electrónico juan@granadostoro.com.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROSSE MAIRE MESA CEPEDA
JUEZ

JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCION SEGUNDA

EL AUTO ANTERIOR .SE NOTIFICA A LAS PARTES
EN ESTADO ELECTRONICO No. 31, A TRAVES DE LA PAGINA
WEB WWW.RAMAJUDICIAL.GOV.CO, HOY 06 DE agosto
DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), A LAS 8:00 A.M.


SECRETARIO